

LA CRISIS DE LA MONARQUÍA JUDICIAL: LA CONSULTA DEL CONSEJO DE CASTILLA DE 1683

B. Cárceles de Gea

Uno de los más arduos problemas que tiene planteados la historiografía española se centra en el hecho de dar una explicación satisfactoria a la serie de cambios y reajustes que en su estructura política experimenta la monarquía, comprendida como realidad político-institucional, en el paso del siglo XVII al XVIII, a fin de, una vez determinada su evolución intrínseca, llegar a aprehender la configuración ulterior que ésta adoptará en el Setecientos. Entendiendo a aquélla no sólo en lo que se refiere a su organización, donde la institución ocupa un lugar destacado¹, sino a su disposición, viéndose ambas igualmente afectadas en un cambio en su orientación². Es en este punto donde adquiere especial relevancia el tema de su «constitución interna», esto es, las relaciones de poder entre los diferentes grupos políticos y la suma potestad de acuerdo con sus atributos e immanente potencialidad, todo regulado bajo una norma, reconocida y normalmente aceptada, teniendo asimismo presente el despliegue de los mecanismos necesarios para garantizar su cumplimiento. En este contexto, el reinado de Carlos II adquiere una significación especial, no sólo como momento de encrucijada, sino como período de tiempo en el que una nueva forma de concebir el gobierno de la monarquía comienza a asentarse disputándose su actualización con las tradicionales relaciones de poder que han caracterizado la modernidad castellana. Choque de dos paradigmas que se enmarcan dentro de una monarquía conciliar que está viéndose suplantada por otra eminentemente ejecutiva. Respondiendo en una gran medida a lo que se ha sostenido como el

¹ Sobre este tema son significativos los trabajos llevados a cabo por P. Molas Ribalta, en concreto el libro colectivo, *Historia Social de la Administración española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII*, Barcelona, 1980. También es de destacar la introducción de L.M. Enciso, «Pedro Molas y la Historia Social de la Administración» en, *Consejos y Audiencias durante el reinado de Felipe II* del mismo P. Molas, publicado por la Universidad de Valladolid en 1984. Para el ámbito catalán podemos encontrar un estudio sobre las más significativas aportaciones a la historia de la administración en la ponencia de P. Molas, «Política i Institucions» en, *Actas Primer Congrés d'Historia Moderna de Catalunya*, Barcelona, 1984, t. 2, pp. 11-18.

² Vid. G. POGGI, *The Development of the Modern State*, London, 1978.

paso de una «monarquía judicial» a otra «administrativa»³. Ahora va a ser el monarca el que, como principal fuente de poder, se va a constituir en el protagonista de una transformación político-institucional que lleva aparejado un cambio sustancial tanto del carácter y esencia del soberano, como de su relación con los diferentes poderes del reino, cambio en el que es su cuerpo burocrático tal y como se encontraba dispuesto, acercándose a unos presupuestos ejecutivos demandados desde la suma potestad⁴, el que se verá especialmente afectado, ocupando un lugar preponderante en esta evolución.

La consulta que el Consejo de Castilla eleva al monarca en 14 de octubre de 1683, emerge y a la vez es manifestación de un momento en el que las relaciones entre la corona y dicho tribunal son especialmente tensas. Desde que, en febrero de 1680, el duque de Medinaceli, nombrado primer ministro, retomara una línea de gobierno, que tiene en la reorganización administrativa uno de sus principales cometidos, y abogase decididamente por su sistematización, la sorda resistencia del tribunal de Castilla, va a llevar a múltiples enfrentamientos en los que el diálogo con la suma potestad se debate en torno a la defensa de un orden polisindial, y la decidida voluntad de aquella por implantar uno ejecutivo sobre la base de su más absoluta independencia. Si bien, hay que constatar que, si es cierto que a partir de esa fecha la reforma institucional encuentra en Medinaceli primero, y Oropesa después, sus más esforzados defensores, no se reduce a estas dos personalidades, pues ya desde que la reina gobernadora tomara los destinos de la monarquía, y aún con más incidencia durante el gobierno de don Juan de Austria, la reorganización de la burocracia se constituye en uno de los primeros objetivos de los gobernantes, haciendo acto de aparición las primeras medidas reformistas. Por lo que la consulta de 1683 es la respuesta a una línea de gobierno en progresión ascendente —cuando ya se ha efectuado la reforma de 1677—, que en torno a dicha fecha va encontrando su relanzamiento decisivo, siendo anterior a la de 1685 y, por supuesto, a la más importante del reinado, proyectada por Oropesa —aunque llevada a cabo poco después de su caída—, de julio de 1691⁵. Sin embargo, no habremos de quedarnos aquí, pues conjuntamente con estas medidas reformistas hay que destacar otra serie de ellas, que teniendo un carácter parcial, llevan implícito el mismo espíritu reorganizador, y que en último término se complementan con las primeras, algunas de las cuales pasaremos a ver en este trabajo. También habremos de tener en cuenta las dificultades por las que va a pasar el régimen de Consejos, en las que se pone de manifiesto su crisis institucional, viniendo a añadirse a aquellas disposiciones reales, y siendo sin duda, una parte más de la política seguida por los primeros ministros.

Hallándose el principio motriz que da origen a la consulta centrado en el tema del salario, éste constituye uno de los puntos que, siendo manifestación de aquel estado de cosas, va a dar lugar a que se dirima un duro conflicto en el que los intereses

³ Dicha transformación ha sido defendida por P. Fernández Albadalejo, vid. especialmente «Monarquía, Cortes y 'Cuestión Constitucional' en Castilla durante la Edad Moderna», *Rev. de las Cortes Generales*, I, 1984.

⁴ Cfr. J. LALINDE ABADIA, «Vida judicial y Administrativa en el Aragón Barroco», *A.H.D.E.*, 1976, pp. 419-521.

⁵ Para la reforma de 1691 en el Consejo de Castilla vid. J. Fayard, *Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746)*, Madrid, 1982.

del Consejo y los de la corona van a encontrar una primera escisión. La remuneración que por el cumplimiento de su oficio recibe el ministro⁶, va a pasar por una serie de dificultades en las que la extrema necesidad del servidor del rey será el resultado ulterior que se va a repetir como denuncia en numerosas ocasiones. El incumplimiento por parte del soberano de las obligaciones que tiene contraídas con sus colaboradores es asimismo una queja y, a su vez, una reivindicación, que se puede rastrear de forma continuada en numerosas consultas. Y es que las dificultades por las que pasa la corona van a encontrar una proyección especial en el régimen polisinodial que, bien sea porque no reciben sus partidas en los plazos estipulados, o bien porque sus honorarios llegan a ser normalmente detraídos por el monarca, va viéndose cómo sus asistencias son continuamente soslayadas. Ciertamente, no se puede decir que esta situación sea una excepcionalidad en momentos puntuales, sino que es una constante que se puede rastrear desde que comenzara el reinado. En consulta del Consejo de Castilla de 1667⁷, se quejará a la reina gobernadora de la congelación de sus salarios que prácticamente se mantienen inalterables —aunque se sostiene que desde Felipe II— desde Felipe IV. En 1668 se debe a los oficiales del Consejo de Indias 61.698.983 mrs.⁸. En 1669⁹ se denuncia el atraso en el cobro que tienen que sufrir los ministros. Sin embargo, la situación va a hacerse cada vez más crítica a partir de 1680, justamente cuando Medinaceli toma las riendas de la monarquía, pudiéndose contabilizar atrasos e incumplimientos sucesivos, en junio de 1680, abril de 1681, abril de 1682; la misma consulta que hemos elegido para este artículo nos lo avisa en octubre de 1683; también en octubre de 1687¹⁰, llegando a que, en 1691, se deba a los consejeros de Castilla 1.500.000 reales¹¹, alcanzando en esta década la desasistencia a tales oficiales los visos más dramáticos. Encabezamientos como «el Consejo representa a V.M. la necesidad que padecen los del Consejo por no haberseles pagado sus gajes cerca de un año para que V.M. se sirva de mandar se les pague luego»¹², son una constante que se repite una y otra vez. Ciertamente, atrasos en el cobro de un año y dos años llegan a ser habituales. A esta penuria económica vendrán a añadirse los donativos forzosos que, ante una apremiante necesidad de numerario, demanda la corona a su cuerpo burocrático¹³. Serán las campañas militares que tienen ocupada a la monarquía las principales culpables de esta serie de detracciones, llegando a afectar en momentos de especial necesidad lo mismo a los oficiales en ejercicio, que a los reformados y jubilados¹⁴.

Sin embargo, aunque esta penuria económica e incumplimiento son hondamente sentidos por el Consejo de Castilla, lo que verdaderamente se constituye en mate-

⁶ Ibidem, pp. 85-103.

⁷ A.H.N. Consejos, leg. 7.177.

⁸ E. SCHÄFER, «La plantilla del Consejo de Indias y las reformas intentadas durante el reinado de Carlos II», rev. *Investigación y Progreso*, 1932, p. 60.

⁹ A.H.N. Consejos, leg. 7.179.

¹⁰ A.H.N. Consejos, leg. 51.442.

¹¹ B.N. Mss 11.034.

¹² A.H.N. Consejos, leg. 51.442.

¹³ Numerosos ejemplos se pueden encontrar en A.H.N. Estado, leg. 6.379.2 y en el mismo archivo sección Consejos leg. anteriormente cit.

¹⁴ R.D. de 10 de noviembre de 1693.

ria de preocupación para el mismo es el hecho de que su supuesta preeminencia política dentro de un ordo jurídico del que forma parte y es cabeza privilegiada, no se traduzca y vea correspondida por la corona en el tema del salario, quejándose amargamente que se paga primero «a los oficiales de Estado y otras personas de inferior lugar». La importancia que adquiere esta denuncia no se nos puede escapar, pues de ella se deriva que los recursos con los que cuenta la Hacienda para la retribución de los servidores de la monarquía, se distribuyen en función de una escala de valores que ya no casa ni coincide con la que el primer tribunal de Castilla tiene en su mente. Lo que quiere decir que, si no recibe su salario, no es por la total carestía y ausencia de recursos, sino porque ya no ocupa el lugar preeminente que pretende desde el momento que otros oficiales sí reciben su remuneración. De nada le servirán ahora argumentaciones como «el que sirve al Altar (esto es a Dios) debe vivir del Altar»¹⁵, pues tal servicio ha dejado de ser reconocido en su status como superior y preponderante. Pues si son ciertas, y en ningún momento se pueden dudar, las dificultades económicas por las que pasa la monarquía, no lo es menos que la corona tiene en mente una serie de prioridades en las que el consejero como miembro del régimen polisinodial queda emplazado. No se trata ya sólo de que la política exterior arrastre tras de sí los fondos con los que cuenta la Hacienda, ni aun que merced a ella la corona se vea continuamente endeudada, sino que, otra serie de ministros directamente implicados con la política seguida por los gobernantes, son los que ahora tienen prioridad. Es así como se concibe v.g., que al marqués de los Balbases, siendo embajador ordinario en París, a pesar de las dificultades hacendísticas, le sea concedida su solicitud de aumento de sus honorarios que, siendo de 12.000 escudos de sueldo y 8.000 de ayuda de costa, pasarán a los 32.000 que gozará como plenipotenciario en Nimega¹⁶. Este ejemplo puede ser sintomático, pues si en algún momento pretendemos corresponder el cargo de embajador con el de ministro de un Consejo, tampoco se nos puede ocultar que aquél era normalmente servido sin asignación ordinaria, corriendo los gastos por cuenta del beneficiario; aunque, en definitiva, lo que es digno de tenerse en cuenta es que ha sido su directa vinculación con los intereses de la monarquía lo que le ha colocado en una situación privilegiada. Junto a esto también las deudas de la corona alcanzan una distribución en orden de prioridad, en el que el consejero vuelve a verse desplazado con respecto a otros acreedores más «valiosos», como sin duda son los asentistas o, como puede serlo, el Gran Elector de Brandeburgo. En efecto, en 1680 uno de los primeros problemas con los que va a tener que enfrentarse Medinaceli con su llegada al ministerio, va a ser saldar una deuda con éste último, cuyo ultimatum se le presenta, de 800.000 escudos¹⁷. Ante esta demanda ¿cómo pretende el consejero que el primer ministro atienda sus necesidades? Además tampoco habremos de olvidar las dificultades económicas por las que pasa la península, pues justo en el trienio anterior a nuestra consulta, entre 1680-82, los precios sufrirán un espectacular descenso¹⁸. Su desplazamiento con respecto a las apremiantes empresas que tienen ocupada a la monarquía es vista por

¹⁵ A.H.N. Consejos, leg. 51.442.

¹⁶ G. MAURA y GAMAZO, *Vida y reinado de Carlos II*, Madrid, 1942, t. 2, pág. 110.

¹⁷ Ibidem, pág. 108.

¹⁸ E.J. HAMILTON, *War and prices in Spain*, Cambridge, 1947, pág. 126.

el gobernante como una necesidad ineludible, haciéndose más aguda a medida que avanza el reinado, viniendo a complementarse con las medidas reformistas, ante lo cual al consejero no le quedará más salida que la queja reiterada.

Por otra parte, un segundo punto que trata la consulta de 1683 referido al favor del monarca, va a añadirse a estas primeras desatenciones. En efecto, un decidido propósito por controlar el sistema de mercedes acompañará a los primeros ministros, en el que se puede vislumbrar cómo es el enquistamiento de la realidad social que reproduce el régimen polisinodial, el que se constituye en principal materia de preocupación. Así, por decreto de 23 de mayo de 1669¹⁹, se lleva a cabo una remodelación del mismo, viéndose afectadas todas aquellas mercedes establecidas desde el año 21 hasta dicha fecha. De la importancia que este tema adquiere y de las dificultades con las que se encuentra en su realización, nos habla el hecho de que el anterior decreto de 23 de mayo se vea ratificado en 1674, 1683 —año este último en el que veremos repetirse toda una serie de decretos dirigidos al mismo cometido—, y ampliado en 1685. No se detendrán aquí estas medidas, pues con posterioridad podemos rastrear la misma preocupación por cortar tal «sangría» económica, como ocurre en 1687²⁰, pudiéndose aún seguir la pista hasta 1700²¹. Ante esta progresión nuestra consulta responde directamente a la reiterada insistencia que Medinaceli lleva a cabo sobre este tema, alegando a su favor que no sólo con el pago escueto de su salario quedarían los consejeros cumplidos, pues en toda una serie de «honras, favores y mercedes» se halla la prueba de la confianza del monarca, que no es sino el reconocimiento público y político del papel y entidad que poseen, la prueba más fehaciente de su «crédito y autoridad». Y es que no se nos puede ocultar que detrás de estas disposiciones se halla una consecuencia de primera trascendencia para el régimen de Consejos, pues con ello, el favor del monarca, el binomio servicio/recompensa que el mismo lleva consigo, se ve roto ante una extrema «necesidad» que viene impuesta por el gobernante. La escisión que necesariamente se produce va aparejada de una desvinculación y paulatino desligamiento entre la figura del príncipe y dichos tribunales. La cordial relación establecida entre ambos mediante una interdependencia contractual que se ve materializada en un sistema de premios, que se distribuye entre aquellos servidores que son copartícipes de tal contrato, y que demuestran la supervivencia de todo un régimen de gobierno²², se ve ahora puesta en peligro por una serie de disposiciones reales que van a ir poco a poco desterrando un tipo de reciprocidad que mantenía a la suma potestad en una situación de evidente sujeción. Puesto que no hemos de olvidar en ningún momento que, aunque la merced se declara en un principio como prerrogativa regia, en un segundo momento se reconoce como obligación ineludible que todo «buen» monarca debe respetar. Ahora las necesidades económicas de la monarquía justifican que el rey se desligue de esta limitación impuesta por los vasallos, rompiendo con una serie de derechos propios del ordenamiento estamental, así como con la costumbre, entiéndase norma, seguida en esta materia por el monarca. Ahora los primeros ministros dejan de tener en cuenta

¹⁹ A.H.N. Consejos, leg. 7.179.

²⁰ A.H.N. Estado, leg. 6.379.2.

²¹ R.D. de 18 de julio de 1700.

²² vid. M. García Pelayo, *Del mito y de la razón en la historia del pensamiento político*, Madrid, 1968.

esta serie de vínculos construyendo nuevos modos de acción²³ que llevan implícito un cambio en la relación entre el soberano y su cuerpo burocrático. El derecho o privilegio, y la costumbre, son sustituidos por las necesidades ejecutivas que determina el gobernante.

Por otro lado, el Consejo puede llegar a reconocer la inoportunidad del excesivo número de mercedes concedidas, llegando incluso a proponer al monarca en 1681, se revoquen todas aquellas mercedes hechas desde principios del reinado de Felipe III, así en Castilla como en Indias y demás provincias sujetas a su Majd.²⁴ Sin embargo, esta declaración no nos puede llevar a engaño, pues se trata más bien de un intento de no perder el tren reformista impulsado ahora por Medinaceli, y antes de que éste se lance decididamente a un control del favor real, vinculándose al mismo con la suma potestad, pero siempre dentro del ordenamiento jurídico-político por el que en definitiva aboga el Consejo de Castilla; impidiendo de esta forma se produzca la ruptura entre ambos como consecuencia del desmantelamiento de la esencia y función que la merced lleva implícita. En efecto, detrás de aquel propósito se oculta una clara intención de defender los intereses del Consejo, ya que «las más (de ellas) han sido obtenidas por importunidad e negociación», y aunque se hayan aducido servicios para conseguir las «estos no los califican por la grande facilidad que hay en las secretarías y oficios por donde pasan de expresar servicios que no tienen la debida comprobación, con que no sólo quitan las sustancias a los Reinos, sino también el aliento a los vasallos beneméritos que ven se aumentan otros sin trabajo, quedando ellos sin el fruto de los suyos»²⁵. Por lo que la merced como recompensa a un servicio prestado es la única que, conforme a derecho, es aceptada por nuestros consejeros. Entendiendo dicho servicio dentro de un marco jurídico-político en el que, en su condición de letrados²⁶, son los llamados a prestar el pertinente consilium al príncipe en su tarea de gobierno. Todas aquellas mercedes que llegadas por otra vía, o bien introducidas sin la requerida justificación de acuerdo con las reglas del juego establecidas por el cuerpo conciliar, serán en todo punto rechazadas por nuestros protagonistas. Es dentro de este juego político desde donde hay que interpretar las conminaciones hechas por el Consejo en favor de la «racionalización» de estos beneficios, y es por ello por lo que simultáneamente no está cargado de contradicción que la defensa de los mismos, dada la política seguida por los gobernantes en esta materia, se constituya en uno de los principales baluartes en su relación con el príncipe.

Con todo, podemos constatar que se está produciendo una transposición en la escala de valores en la que la improductividad es en todo punto reprochable, siendo paulatinamente desplazada de la realidad de la monarquía²⁷. La eficacia es el primer objetivo que se impone al primer ministro; de ahí que el costo que lleva consigo

²³ Cfr. THOMAS N. BISSON, «Celebration and Persuasion: Reflections on the Cultural Evolution of Medieval Consultation», *Legislative Studies Quarterly*, VII, 2, May, 1982, pág. 190.

²⁴ B.N. Mss 1.322.

²⁵ Ibidem.

²⁶ Vid. J.M.^a GARCIA MARTÍN, «El dilema ciencia-experiencia en la selección del oficial público de la España de los Austrias», *Actas del IV Symposium de H.^a de la Administración*, 1983, pp. 261-280.

²⁷ Vid. J.A. MARAVALL, *Estado Moderno y mentalidad social*, Madrid, 1972, 2 vols., y H. KAMEN, *La España de Carlos II*, Madrid, 1981, pp. 423-433.

una organización política, que tiene como uno de sus principales atributos la merced, no recompense como para seguir perpetuándola y manteniéndola. De este estado de cosas es manifestación el decreto de 31 de julio de 1693²⁸, por el que se establece que «los que recibieren merced de honores del Consejo de Castilla, no deban de la antigüedad de ella preferir a los consejeros propietarios y de actual ejercicio, de manera que el honorario cuando entre en ejercicio sea como el más moderno por los inconvenientes que de lo contrario se han experimentado hasta aquí. Y así se tendrá entendido en la Cámara para su observancia y cumplimiento». El parasitismo basado en el honor es desbancado por la práctica y actualización del oficio, lo que en definitiva no supone sino que se está en condiciones de reportar algún beneficio cuantificable para la monarquía, convirtiéndose con ello en requisito indispensable para su más correcto y acertado gobierno.

Por otra parte, la merced también puede ser utilizada por el monarca en momentos clave para ganarse la condescendencia y favor del súbdito; tal ocurre en el decreto de 2 de octubre de 1700²⁹, por el cual se restituyen las mercedes suspendidas a viudas de ministros y militares. No debe ser ajena a esta disposición la tensa situación por la que pasa la monarquía, pues con misma fecha 2 de octubre el rey firma el texto del testamento que habría de ser definitivo. La intranquilidad que la cuestión sucesoria lleva consigo, penetrando especialmente en el Consejo de Castilla, que el anterior día 1 había conminado a Carlos II a que dispusiera su testamento³⁰ aconseja una medida distractora y, en cierto modo, benéfica, que suavice y contente los ánimos. La diferencia que entre esta concesión y la merced, como producto de una complicidad entre rey y vasallo, existe, es ciertamente abismal. Ahora es fruto de una graciosa licencia del monarca que en un momento concreto llega a otorgar, rompiendo con la tendencia y línea seguida en su reinado, no como la actualización de un vínculo político. Más tiene de declaración formal que de base real de la que se sustente y a su vez sea expresión.

Si en materia de merced el Consejo ve cómo el favor del monarca va paulatinamente alejándose de su estructura, este alejamiento es también constatable en otra serie de dádivas o beneficios que asimismo son prueba y demostración de la connivencia existente entre príncipe y Consejo. La propina que, ante un acto o acontecimiento memorable, se concede a dichos tribunales posee un valor eminentemente simbólico, por el cual nuevamente esta deferencia es denotadora de la preeminente estimación que, dada su naturaleza y función, le es reconocida al Consejo. En el momento que se cuestione esta reciprocidad, dichos tribunales quedarán abandonados de la mano vivificadora del monarca. Por expresa resolución de la reina, quedarán abolidas las propinas extraordinarias, pasando a ser ordinariamente tres, por decreto de 2 de mayo de 1669; una por San Isidro, en 15 de mayo; otra por San Juan, en 24 de junio; y, por último, otra por Santa Ana, en 26 de julio³¹. Lo que ha quedado establecido en este decreto va a procurar ser mantenido por el gobernante, lle-

²⁸ A.H.N. Consejos, leg. 51.442.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ A.H.N. Consejos, leg. 7.213. Dicha consulta es reproducida por A. Domínguez Ortiz en su *Introducción al Testamento de Carlos II*, Madrid, 1982, p. XLVIII.

³¹ J. FAYARD... *op. cit.*, pág. 100.

gándose a erradicar cualquier iniciativa del Consejo en este ámbito, ya que, en decreto de 12 de agosto de 1677, don Juan de Austria dispone que sin expresa resolución del monarca no se puede librar ni hacer gasto alguno de cualquier género que fuese. La soterrada oposición del Consejo a esta evolución va a permanecer latente hasta que en un momento dado salte la chispa. Esto ocurrirá un año después del anterior decreto, en 1678, cuando, con motivo de la reducción de Mesina, habiendo salido Carlos II a caballo a dar las gracias por tan feliz acontecimiento, el Consejo, sin previa disposición real, libra una serie de propinas para los ministros. La respuesta del rey, entiéndase don Juan, será tajante, llamando la atención al Consejo; en primer lugar, por haber contravenido la orden de la reina gobernadora; y en segundo, y más importante, por haberse tomado estos «arbitrios» sin expresa resolución regia, y a pesar de lo que el primer ministro había dispuesto en contra de estas libertades. Por lo que, aparte de la fría relación que del recorte del favor regio pueda derivarse, se desprende una consecuencia de mayor trascendencia para la configuración política de la monarquía: la dependencia y subordinación del Consejo ante el más alto poder del reino. La iniciativa que tradicionalmente ha sido defendida como prerrogativa inexcusable y legítima, que le es propia en función de un poder de base que posee a partir de sus dependencias³², es en estos momentos cercenada por don Juan de Austria, colocándose el soberano en una situación de evidente superioridad, desligado de cualquier reciprocidad con respecto a la institución. Tal declaración se lleva a cabo sin ningún tipo de apelativos: no puede el Consejo bajo ningún concepto arrogarse esta prerrogativa, y menos contraviniendo una orden del rey. Detrás de ello no se intuye ya una pugna en igualdad de condiciones, sino que la suma potestad se encumbra por encima de cualquier instancia político-institucional, avisando a ésta del lugar que le corresponde en su relación con Carlos I no siendo éste otro que el de su tajante supeditación. Por supuesto, no dejará el tribunal de Castilla de justificar su postura, apelando a la tradicional política desplegada por los antecesores de dicho monarca, o lo que es lo mismo, al orden establecido. Mas tampoco don Juan se dejará amedrentar por tales argumentaciones, sosteniendo que «los ejemplares que se refieren de lo pasado no lo son para después de la orden... que dio regla a lo que se había de observar para adelante...»³³. Con ello, el recurso a la tradición como legitimidad, de acuerdo con una base jurídica que el mismo Consejo había conformado, queda desmantelado, lo que no quiere decir sino que el ordenamiento político-institucional en su relación con el príncipe ha cambiado de orientación, quedando ahora ordenado en unos supuestos verticales en los que es Carlos II, o más exactamente, el poder que representa, el que, como poder ejecutivo, dispone sin ninguna cortapisa las normas que han de servir para el funcionamiento e interrelación entre los diferentes miembros de la monarquía. A partir de ahora, las pautas por las que éstos se han de guiar se van a establecer no en función de un logos preestablecido, sino que van a ser las necesidades y voluntad del poder ejecutivo las que van a disponer las nuevas vías de actuación de acuerdo con la ejecutividad de los actos de gobierno. El único derecho que reconoce ahora Carlos II es el que emana de su persona, por lo que desde este momento todo acto o decisión que se origine

³² S. DE DIOS, *El Consejo Real de Castilla (1385-1522)*, Madrid, 1982.

³³ A.H.N. Consejos, leg. 51.442.

en él, en modo alguno podrá ser interpretado como «obligación» impuesta por los vasallos, o más exactamente, perteneciente a una relación contractual, sino que al contrario, se debe a su más absoluta y libre voluntad. Los actos de gobierno se van configurando poco a poco independientemente de la realidad administrativa conciliar, provocando una disociación entre la misma y el poder efectivo³⁴ comandado por los primeros ministros. Ciertamente, «Prescindir de los Consejos no era una novedad»³⁵, pues otra serie de vías de acción política están experimentando un progresivo avance protagonizando el gobierno de la monarquía, destacando en primer término la Secretaría de Despacho en torno a la cual se constituirá un verdadero gobierno de gabinete³⁶, que irá afianzándose como alternativa al gobierno de Consejos.

Otro problema que resalta de la consulta, y que en sí representa uno de los principales datos que denotan la paulatina pérdida de poder del tribunal de Castilla, se refiere a la indefensión en la que se halla con respecto al gobernador de Hacienda, en concreto, en el tema del salario. En efecto, del presidente de Hacienda depende que el ministro de Castilla reciba o no sus honorarios. Por medio de él se dan los libramientos necesarios para que se haga efectiva por el pagador del Consejo, la cantidad estipulada. Además, sin su previo consentimiento no se puede introducir alteración alguna en el curso normal de tales retribuciones. Por supuesto, en primer término el que tiene la voz decisoria es el monarca, pues de él emerge el impulso inicial que da marcha a toda esta maquinaria. Sin embargo, el posterior desarrollo de los acontecimientos es de tal complejidad, que nada puede hacer ante el curso que los mismos van a seguir, quedando todo en manos y a disposición del Consejo de Hacienda. Numerosas son las consultas en las que el tribunal de Justicia denuncia que, a pesar de las reiteradas órdenes que tiene dadas su Majd. al gobernador de aquella institución para que se cumpla el pago de sus emolumentos, éstos se ven retrasados una y otra vez. En efecto, aun contravieniendo los mandatos reales, dicho gobernador se ve obligado a posponer su resolución ante las apremiantes necesidades económicas de la monarquía, quedando sin efecto. Por otro lado, él mismo, en un momento concreto, ante una necesidad de numerario, puede detraer la cantidad necesaria dejando sin cobro a los consejeros. De esta situación se hace eco la consulta de 1683, denunciándola y apelando a su erradicación sin que «pretexto» alguno pueda justificar el recurso a tales medidas. Con ello se pretende contraponer los atributos del Consejo, su potestad, por encima de cualquier legitimidad ajena a su ordenamiento. Frente a la política seguida por los primeros ministros, en la que son las «necesidades» de la monarquía las que guían sus pasos en el gobierno, el Consejo anulando dicho fundamento, pretende sobre la base de su instituto, colocarse por encima de las nuevas prioridades que ahora van asentándose, lo que, en definitiva, no significa sino que se está abogando por una orientación diferente, de acuerdo con el ordenamiento jurídico-político del Consejo de Castilla, de la monarquía, en la que es éste el que determina, y en último término decide, la primacía de cada elemento

³⁴ J.A. ESCUDERO, «Rey, Ministros y grupos políticos en la España de los Austrias», Santander, 1979, pág. 12.

³⁵ G. MAURA y GAMAZO, *Carlos II y su Corte*, Madrid, 1915, t. 2, pág. 274.

³⁶ Vid. H. KAMEN... op. cit., pp. 51-55.

o asunto público o político, en función de sus reglas del juego y lenguaje o diálogo de gobierno. No hay mayor necesidad dentro del reino que su adecuada dirección «y siendo la primera obligación de V.M. la administración de justicia, y el atributo que más resplandece en los Reyes que se administre con entereza, rectitud y neutralidad por sus Consejos, parece consecuencia precisa desta obligación suministrar todos los medios que puedan conducir a efecto tan grande que tiene tantas consecuencias en lo temporal, y que es de muy particular agrado de Dios»³⁷. No siendo estos medios otros que los referidos a su adecuada remuneración, se desprende que de la cumplida retribución del ministro depende que el gobierno de la monarquía, así como la función del soberano, no se vean desvirtuadas en ningún momento. En modo alguno puede Carlos II soslayar este crucial cometido, puesto que, siendo su primera obligación aquella que personifica el Consejo, esto es, la administración de justicia, debe consecuentemente facilitar y poner en sus manos los medios necesarios para que la misma sea real y efectiva, ocupando un lugar preferente dentro de aquéllos el salario, en lo que tiene de impulso económico y político. Esta es la verdadera y única prioridad que el primer ministro debe tener en mente, desterrando, como consecuencia, cualquier título de necesidad sobre la base de la defensa de la monarquía. Los «asuntos» del monarca, y los «derechos» del Consejo, van poco a poco desligándose en detrimento de estos últimos, y es que, ciertamente, «The time is not right to hold such assemblies»³⁸. Ahora la monarquía rompe su tradicional ordenamiento político para construir una nueva ordenación en la que es el poder ejecutivo el principio configurador de la misma, y a partir del cual se despliegan los mecanismos requeridos por la acción de gobierno para estar en condiciones de atender sus demandas. La incompatibilidad que existe entre éstas y las que son propias de una monarquía conciliar son fruto de una paulatina evolución en la que los compromisos del rey han ido construyendo sus propios modos de acción, de acuerdo con una legitimidad que lleva implícita la ruptura de aquellas interdependencias establecidas con cualesquiera poderes del reino. Esta tendencia evolutiva alcanza su realización en el reinado de Carlos II, siendo expresión de la misma el decidido propósito de los primeros ministros por controlar la relación salidas/entradas de la Hacienda. La reducción de gastos se encumbra como un medio indispensable para obtener el saneamiento financiero solicitado por las obligaciones de la monarquía. Tal política irá directamente dirigida a una remodelación de aquel tipo de desembolso propio de un ordo jurídico-político en el que el mismo posee un carácter recíproco sobre la base de una compensación a un servicio prestado, cargado de un valor contractual en el que el compromiso se erige como el principio regulador de tal relación. Ahora el gasto se independiza de dicho principio para configurarse única y exclusivamente a partir de unas necesidades de gobierno en el que es el rey quien determina su dirección y oportunidad. Es así como, desde que comienza el reinado, el gobernante se orienta decididamente a controlar las partidas destinadas a sus oficiales y servidores.

³⁷ A.H.N. Consejos, leg. 7.177.

³⁸ Henri IV a Mantignon, 1595. J.R. MAJOR, *Representative Government in Early Modern France*, New Haven, 1980, pág. 267. Op. cit. Conrad S.R. Russell, «Monarchies, Wars, and Estates in England, France, and Spain, c. 1580 - c. 1640», *Legislative Studies Quarterly*, VII, 2, May, 1982, pág. 213.

La Junta de Medios reunida entre 1666 y 1670³⁹, nos pone de manifiesto esta primera preocupación, teniendo como uno de sus principales objetivos la reducción de gastos de la Hacienda a través de su exhaustivo control. La reformatión de gastos en la corte; de gajes duplicados que gozan diferentes ministros de los Consejos; de plazas supernumerarias que hay en los Consejos y Secretarías de Estado y Guerra; y, por fin, de los sueldos de los militares, son entre otras, las medidas propuestas que, retomando una tendencia anterior, sientan la base de lo que con posterioridad va a ser desarrollado. La escisión que se produce entre los intereses de estos oficiales y los de la corona llega hasta el punto de que lo que por aquéllos es tenido como principal signo de su connivencia con el príncipe, para la reina gobernadora llega a ser considerado como «gasto superfluo» que es necesario erradicar para bien de la monarquía: «la estrechez de la Real Hacienda por los muchos y grandes gastos públicos que se ofrecen en la defensa de estos Reinos es tan grande que obliga a procurar por todos caminos el alivio de ella, y porque el más eficaz y conveniente sería ahorrar gastos superfluos en cuanto fuese posible, siendo como es mi ánimo y deseo, empezar este ejemplar, como lo he mandado, por las Casas Reales, para que también en los Consejos y Tribunales se haga lo mismo, encargo y ordeno muy particularmente al de Castilla considere con mucha atención si todo lo dependiente de él hay algo que se pueda y deba reformar, consultándose sobre ello en la brevedad que conviene para que yo resuelva lo que tuviere por bien ejecutar así»⁴⁰. La austeridad pretende imponerse como un medio para sanear la Hacienda, y que, habiendo comenzado por las Casas Reales⁴¹, busca introducirse en el Consejo de Castilla. Ahora el gobernante se acerca a sus servidores con una mirada inquisitiva en la que su remuneración se configura de acuerdo con las necesidades de la monarquía. De ahí que no nos deba extrañar la obstinada insistencia de este oficial en denunciar las detracciones continuas que sufre su salario, así como la penuria económica en la que se halla, resaltando a su vez la importancia y trascendencia, desde un punto de vista político y de gobierno, de la cumplida y adecuada retribución de los colaboradores del monarca. Con ello nos hallamos ante una diferente forma de concebir el salario en la que, para el consejero, será entendido como impulso económico y, fundamentalmente, político, demostrativo de su trascendente y privilegiada misión, así como del vínculo existente con el soberano, llegando a ser tenido en cierto modo como un derecho, por otro lado imprescindible, por cuanto se halla orientado al mejor gobierno de la república. Mientras que para el rey es entendido como un beneficio cuantificado en función, por un lado, de los asuntos de gobierno, y por otro, de acuerdo con las prestaciones que esté en condiciones de aportar a la política seguida por los primeros ministros. De ahí que los asistencias basadas en el honor, como son las que van dirigidas a los consejeros supernumerarios, sean continuamente acometidas por el gobernante. Con todo, el consejero va a recibir sus honorarios no tanto como miembro del régimen polisindial, como por cuanto es parte integrante de una jerarquía administrativa conformada en directa relación con los servicios demandados y prestados a la corona, desde el momento que los atribu-

³⁹ G. MAURA y GAMAZO, Carlos II... op. cit., t. 2, Apéndice 3º, pp. 595-601.

⁴⁰ A.H.N. Consejos, leg. 7.177.

⁴¹ Vid. GARZON PAREJA, *La Hacienda de Carlos II*, Madrid, 1980, pp. 139-160.

tos que posee en relación con sus emolumentos han sido adecuados a los intereses de la monarquía, siendo desterrado aquel gasto considerado «superfluo» e improductivo para el gobernante desde un punto de vista político.

Ante esta línea progresiva el Consejo de Castilla se encuentra indefenso, no contando con más recurso que la apelación al monarca para ver resueltos sus problemas. Es por ello por lo que, a fin de estar en condiciones de controlar sus emolumentos y evitar el dominio solitario del Consejo de Hacienda, idea la introducción de una persona afecta al Consejo, ministro del mismo, para por este medio estar en condiciones de decidir sobre un ámbito de actuación que le afecta directamente, y en último término impedir su supeditación a otro organismo. Ciertamente lo que se está cuestionando es la potestad y preeminencia del Consejo Real, así como su iniciativa y capacidad decisoria, pues desde el momento que comienza a no estar en condiciones de disponer y decidir sobre una esfera concreta, su preeminencia política queda mermada en beneficio de un tercero. Por tanto, un instinto de supervivencia acompaña a aquella reivindicación, en un intento de recuperar un importante espacio político-económico. Si bien, es de notar que tal espacio no llega a tenerse como propio sin ninguna interferencia, sino que, al contrario, se reconoce desde el primer momento en una colaboración con el Consejo de Hacienda. La concesión que aquí se produce no está exenta de un considerable trasfondo político, pues más que defender un atributo específico del Consejo se está intentando infiltrar en un espacio que, siéndole ajeno, está provocando su desplazamiento, y más en un tema de tanta trascendencia como son las partidas y recursos de la Hacienda. Además de que mediante esta intromisión se podrá transplantar a este terreno la particular forma de entender el Consejo Real, en función de su preeminencia, entendida en un ordo jurídico-político que le es propio, la realidad de la monarquía; es decir, serán las necesidades de aquel ordenamiento las que determinarán el fin que han de tener los fondos hacendísticos, así como su distribución, y no las de esta última. Pues no hemos de olvidar que con ello se pretende evitar la desviación a otros «asuntos» de las partidas destinadas para el pago de los consejeros. No se trata sino de garantizar su retribución, o lo que es lo mismo, garantizar su preeminencia dentro de las preocupaciones hacendísticas de los primeros ministros. Detrás de esta serie de propuestas y argumentaciones se oculta una búsqueda desesperada de aquellos medios susceptibles de afirmar la propia autoridad evitando su progresivo desplazamiento del tren de la monarquía. Pues no se nos puede ocultar que, si su penuria económica es hondamente sentida, pretendiendo se vea erradicada con estas conminaciones al monarca, lo que se está dirimiendo en este litigio es la pérdida de capacidad política y de gobierno del Consejo. Por lo que, en definitiva, al abogar por su protagonismo conjunto en el tema del salario con el Consejo de Hacienda, se está defendiendo aquel punto de apoyo encargado de garantizar su potestad, y ésta dentro del ordenamiento constitucional al que pertenece, siendo éste último, el que deberá salir beneficiado.

* * *

En definitiva, como hemos podido ir viendo, la resistencia a toda esta serie de medidas desplegadas por los gobernantes se debate en torno a la defensa de un logos polisindial al que pertenece el Consejo de Castilla, haciendo especial hincapié en

sus atributos como mecanismo susceptible de garantizar el *statu quo* por el que se aboga. Y es que detrás de ello se halla toda una concepción de la monarquía, que en estos momentos se encuentra en claro retroceso. Y son las mismas palabras de nuestra consulta las que nos ponen en el centro del problema. Pues, de dos partes que tiene la corona, una inapelablemente corresponde al Consejo, concebido como medio a través del cual el rey actualiza y cumple con su primera y más trascendental obligación que es hacer justicia⁴². Siendo ésta la llamada a instituir el orden⁴³, en el que la comunidad adquiere una configuración jurídica a partir de la cual estará en condiciones de ejercer, por medio de sus gobernantes e instituciones, la autoridad pública⁴⁴, pertenece a una realidad en la que el derecho, sobre la base de su vinculación a la ley natural, emerge como el principio constitutivo a partir de cuya unidad la monarquía se desdobra en una doble vertiente. La justicia encomendada al Consejo, por cuyo medio deberá actualizar aquel principio, y el poder ejecutivo en menos del monarca, dirigido igualmente, y en estrecha colaboración con la primera parte, al mismo cometido. Dualidad de dos principios cuyo idéntico origen determina su interdependencia. Testimonio de este sustrato nos los da Palafox, cuando nos dice que la monarquía española «la formó el derecho, la estableció la religión, la promovió la justicia, la ha gobernado la Cristiandad y prudencia de tan excelentes, píos y santos príncipes»⁴⁵. Por lo que, si bien el poder ejecutivo se reconoce en su identidad peculiar, tal identidad le viene determinada como parte de una premisa jurídica que le antecede. De aquí es de donde procede la unidad indisoluble que debe caracterizar las relaciones entre Rey y Consejo, por cuanto que tienen un origen común, y es por ello por lo que, simultáneamente, al serle reconocido a la suma potestad una idiosincrasia particular, se hace imprescindible una interconexión contractual que selle ambos puntos y garantice la realización del primer mandamiento que el derecho, como principio configurador, exige: la administración de justicia. De la unidad, pasando por la dualización, se vuelve a la unidad, pudiendo asemejarse la monarquía a una circunferencia⁴⁶ que, segmentada en su interior, forma una unidad compacta intrínseca y extrínseca. La primera merced al pacto expreso de dos polos que forman parte de un mismo cuerpo, y la segunda, no sólo como la culminación de esta reunión, sino como la manifestación de una unicidad jurídica. De aquí toma nuestro Consejo su constitución basada en una monarquía judicial, transformando esta primera premisa en poder⁴⁷, afirmando su supremacía jurídico-política, merced a la cual está en condiciones de arrogarse la representación de la comunidad, ejerciendo la autoridad y gobierno en connivencia con el príncipe. Por lo que, partiendo de «la idea que concibe a la Corona como especie de universitas que teniendo

⁴² Vid. J. BENEYTO, «La gestación de la Magistratura Moderna», *A.H.D.E.*, XXIII, 1953, pp. 55-81.

⁴³ M. GARCIA PELAYO, op. cit. pág. 181.

⁴⁴ J.M. PEREZ PRENDES, «Introducción» a, *Teoría de las Cortes* de F. Martínez Marina, Madrid, 1979, pág. 23.

⁴⁵ «Juicio interior y secreto de la Monarquía» B.N. Mss 11.306, pág. 190.

⁴⁶ A este efecto recuérdense las palabras de Saavedra: «Del centro de la justicia se sacó la circunferencia de la corona», *Idea de un político cristiano representada en cien empresas*, Madrid, 1658, pág. 124.

⁴⁷ A. CAVANNA, *La Storia del Diritto Moderno (secoli XVI-XVIII), nella più recente Storiografia Italiana*, Milano, 1983, pág. 86.

como miembros al rey y a los estamentos, es la forma jurídica de la unidad del reino»⁴⁸, apropiándose para sí la segunda parte de este cuerpo, de la que emerge la condición estamental del consejero⁴⁹, y del papel que la justicia juega dentro de este entramado, extrae el Consejo, como Consejo de Justicia, su preeminencia y privilegiada situación al lado del príncipe. Por tanto, como principio constitutivo de la monarquía, y como vía a través de la cual ésta cumple con la función y fin que la comunidad le tiene marcado, nuestro tribunal se presenta ante el soberano y primeros ministros, demandando la atención que su instituto exige.

Ciertamente, el Consejo se considera a sí mismo como principio constitutivo por cuanto que participa directamente del mismo, y por ello es el llamado a hacer efectivo el fin que aquel principio exige y la misma comunidad demanda, no siendo éste otro que el bien común, si bien entendido ahora en un contexto en el que es la administración de justicia la que se identifica plenamente con su esencia. En segundo término, y a partir de este primer escalón, se deriva la estrecha colaboración entre rey y Consejo, que debe caracterizar e identificar el gobierno de la monarquía. Esto debe quedar perfectamente asentado a través de la especial deferencia, atención y consideración que el soberano debe tener para todos y cada uno de los atributos del Consejo, por cuanto que el mismo rey se considera como parte integrante de su ordenación. Además de que no hemos de olvidar que aquél ostenta la jurisdicción real, entendida como un privilegio dentro de un mundo eminentemente atomizado desde el punto de vista jurisdiccional⁵⁰, que le proporciona el sustrato necesario para gobernar en conjunción con el monarca, entendiendo siempre dicha conjunción a partir del principio jurídico del que procede.

Esta es la realidad constitucional por la que aboga nuestra institución, y es esta misma la que hemos podido ir viendo cómo continuamente era puesta en entredicho por el gobernante. Son las necesidades ejecutivas de una monarquía en la que es la gobernación la que prima sobre cualesquiera consideraciones judiciales⁵¹, las que van poco a poco desterrando reminiscencias de un logos político-institucional, en una evolución en la que el mismo consejero va a verse afectado, perdiendo asimismo su carácter judicial, llevando a que sea el monarca el principio a partir del cual se configura y estructura la monarquía, siendo su primer atributo la gobernación que ya no es entendida como función judicial, sino que al contrario, como función ejecutiva. De ahí que todas aquellas propiedades o atributos del régimen polisinodial que veíamos entraban en colisión con los compromisos y obligaciones de la suma potestad, buscasen ser desterrados a fin de estar en condiciones de solventarlos. Ahora la «necessitas o salus publica» se constituye en la premisa que justifica e impulsa a los gobernantes, construyendo a partir de ella su realidad de gobierno, distanciando-

⁴⁸ M. GARCIA PELAYO, «La Corona (Estudio sobre un símbolo y un concepto político)», *Cuadernos Hispanoamericanos*, abril, 1967, n.º 208, pág. 44.

⁴⁹ Vid. J.A. MARAVALL, «La formación de la conciencia estamental de los letrados», *Rev. Est. Pol.*, julio-agosto, 1953, pp. 53-81.

⁵⁰ Vid. M. LOPEZ REY, «La jurisdicción común castellana en el siglo XVI (un intento de construcción histórica)», *Rev. General de Legislación y Jurisprudencia*, t. 166, n.º IV, abril 1935, pp. 447-507.

⁵¹ Vid. A. GALLEGU ANABITARTE, *Administración y jueces: Gubernativo y Contencioso. Reflexiones sobre el Antiguo Régimen y el Estado constitucional, y los fundamentos del derecho administrativo español*, *Rev. General de Legislación y jurisprudencia*, LXIII, 231, 1971, pp. 237-348.

se como consecuencia de los «iura quaesita»⁵²; viéndose especialmente afectado el Consejo de Castilla, por cuanto todos aquellos derechos o atributos que le eran específicos son olvidados en beneficio de una organización administrativa en la que la expedición es su primer mandamiento, tal y como por los borbones va a ser entendida. En definitiva lo que se está produciendo es una disociación entre el soberano y su Consejo, como consecuencia de la paulatina separación de aquellos principios que les identifican: la justicia y la gobernación.

⁵² G. ARIÑO ORTIZ, «Derechos del Rey, Derechos del Pueblo», *Actas II Symposium Hº de la Administración*, Madrid, 1971, pág. 74.

APENDICE

Consulta del Consejo de Castilla de 14 de octubre de 1683
A.H.N. Consejos, leg. 51.442.

«Habiendo representado el Consejo repetidas veces a V.M. que sobre ser tan cortos y limitados sus salarios, no se le pagan, y de los que tienen debengados del año pasado de 82 sus Ministros, unos han cobrado alguna parte, y otros nada, aunque V.M. se ha servido de mandar que en primer lugar se les pague en la nómina de los Consejos. No se ha ejecutado sin embargo de las reales órdenes de V.M. por divertirse el caudal destinado para este efecto y echar mano de él pagando primero a los oficiales de Estado y otras personas de inferior lugar, pues a no ser así, es constante no se retardara tanto la paga y satisfacción de dichos salarios que para fin de diciembre del presente se cumplirán dos años, y cada día se imposibilita más la cobranza, cuando por ser alimentos que V.M. les tiene señalados en rigurosa justicia se debieran pagar por tercios cada uno anticipado, y servirse de mandarlo hacer así.

Señor. Con todo respeto y reverencia, vuelve el Consejo a representar a V.M. la necesidad grande que padecen sus ministros y cuán alcanzados de medios se hallan para poderse mantener en su Real servicio con el lustre y tratamiento de sus personas, que por la autoridad de tan gran monarca, cuya persona tan inmediatamente representan, debe ser lucido y honrado, demás del continuo trabajo y ocupaciones del oficio, que son tan grandes como se sabe, y los inconvenientes grandes que de la dilación resultan, que son muchos y muy considerables, así respecto de la Real grandeza de V.M. y sus gloriosos progenitores, de la cual han redundado siempre particulares influencias en los deste Consejo, no contentándose con darles solamente sus salarios (que éstos de ordinario no alcanzan a lo preciso y necesario), sino con acrecentamiento de grandes honras y favores y mercedes, en que no sólo muestran su natural inclinación y propensión de hacer bien, que es atributo propio suyo, sino alentar y dar nuevo vigor y fuerzas a sus Ministros para que se desvelen en su Real servicio y en el cumplimiento de sus obligaciones, como también respecto del crédito y autoridad deste Consejo, pues de dos partes que tiene la Corona, que es mandar y hacer justicia, la mitad que es el mandar la tomaron para sí los señores Reyes, y la otra mitad y más principal parte que es hacer justicia, la dieron al Consejo, con que ni han sido mal servidos por la misericordia de Dios, ni el gobierno público ha perdido la reputación que es justo tenga y tendrá siempre que no se menoscabare algo de la de este Consejo. Y así suplica a V.M. se sirva de mandar que con efecto se ejecuten y cumplan con toda precisión, y sin más dilación sus reales órdenes, y que de lo consignado en la nómina de los Consejos, de lo más pronto y efectivo se pague en primer lugar todo lo que se está debiendo del año pasado y éste, a los Sres. Ministros deste Consejo, sin que por la Presidencia de Hacienda se pueda echar mano, ni valerse de él por ningún título, ni pretexto, y que para que lo ejecute el super-

intendente general de la nómina y pagaduría, intervenga juntamente con él un ministro de los de este Consejo, el que fuere servido V.M. nombrar a quien puedan recurrir los demás de él, y con la intervención de ambos prometerse la paga y satisfacción de todo lo que se les debe, por hallarse muy alcanzados y empeñados los más, sin tener otros medios con que desempeñarse ni poderse mantener.

V.M. resuelva lo que más convenga a su Real servicio, y teniendo presente el continuo trabajo y amor con que se emplea el Consejo en él, se sirva de honrarle y hacer merced como espera de su liberal mano».